

México entra en modo presión: soberanía, alianzas y empleo formal marcan la agenda nacional

La política mexicana vive una jornada de alta tensión institucional. La FGR abrió una nueva línea de investigación por el caso de El Mayo Zambada y posibles violaciones de Estados Unidos a la soberanía nacional; Morena y sus aliados afinan posiciones rumbo a 2027; y el IMSS presume cifras históricas de empleo formal mientras enfrenta cuestionamientos por contrataciones y guarderías subrogadas. El país no está en pausa: está ajustando sus piezas de poder.

El caso de El Mayo Zambada volvió a sacudir la agenda nacional, pero esta vez con una dimensión mayor: la relación entre México y Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República informó que investiga posibles violaciones graves al derecho mexicano e internacional por la captura y traslado de Ismael Zambada García a territorio estadounidense. La fiscal Ernestina Godoy habló de tres posibles escenarios: violaciones legales, un pacto al margen de la ley y una mentira diplomática.

El señalamiento apunta directamente a la versión que en su momento sostuvo Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, quien negó que su país hubiera participado en la operación. Salazar respondió que no fue avión, piloto ni operación estadounidense.

El choque ya no es menor. Si México acredita participación de agencias extranjeras sin coordinación formal, el caso se convierte en un expediente de soberanía. Si no lo acredita, el tema puede desgastarse como confrontación política. La diferencia entre ambas rutas está en una sola palabra: pruebas.

Mientras tanto, la política interna avanza rumbo a 2027.

Morena obtuvo respaldo judicial para usar una aplicación móvil en el registro de militantes. La herramienta puede fortalecer su estructura territorial, pero también abre una obligación delicada: garantizar que cada afiliación sea libre, voluntaria y auténtica. En política, digitalizar no siempre significa transparentar; la tecnología ayuda, pero no sustituye controles.

La batalla también se mueve en el Senado. Varios perfiles oficialistas buscan la presidencia de la Mesa Directiva a partir de septiembre. Higinio Martínez ya levantó la mano, mientras la oposición rechaza que Gerardo Fernández Noroña pueda repetir. La presidencia del Senado no es un adorno institucional: es conducción política, agenda legislativa y control simbólico.

En Chihuahua, el Partido Verde mandó un mensaje directo: quiere alianza con Morena y PT, pero sólo si Cruz Pérez Cuéllar encabeza el movimiento en el estado. La condición exhibe el nuevo valor de los aliados. Morena conserva el liderazgo nacional, pero sus socios ya no juegan de relleno; negocian posiciones con calculadora en mano.

Movimiento Ciudadano también intenta crecer en territorio adverso. En Guanajuato, apuesta por Alejandra Gutiérrez y por parte de la estructura política que gobernó León bajo siglas panistas. El movimiento es audaz, pero el reto es monumental: Guanajuato no cambia identidad electoral sólo porque cambien de camiseta algunos cuadros.

En sindicatos, el país vive una calma relativa, pero debajo de la superficie hay tensión.

El magisterio sigue siendo una fuerza con capacidad de presión territorial. En Oaxaca, la propuesta de contratar maestros sustitutos durante paros sindicales abre un debate fuerte: cómo garantizar el derecho a la educación sin cancelar el derecho de protesta laboral.

En Coahuila, el caso AHMSA mantiene su impacto social. La crisis industrial golpea trabajadores, proveedores, comercios y familias. No es sólo una empresa en problemas; es una región esperando señal federal. Y cuando una región espera demasiado, el desgaste social se acumula.

El IMSS aparece con una doble cara.

Por un lado, el Instituto reporta 22 millones 779 mil 704 trabajadores afiliados, el nivel más alto para un mes de junio desde que hay registro. El crecimiento anual fue de 2%, el mayor avance en casi dos años. El Gobierno lo puede presumir con razón.

Pero hay letra chiquita. Analistas señalan que una parte importante del crecimiento proviene de la formalización de trabajadores de plataformas digitales. Es buena noticia, pero no necesariamente significa que todos esos empleos sean nuevos. Se trata, en buena medida, de sacar a trabajadores de la sombra estadística.

Por otro lado, el IMSS debe cuidar su flanco administrativo. Una empresa fue sancionada e inhabilitada por entregar información falsa en una licitación de víveres para unidades médicas. En salud pública, un proveedor irregular no es un detalle menor: es un riesgo operativo.

Y sigue abierto el expediente de guarderías subrogadas. Si no se resuelve antes de diciembre, miles de niñas y niños podrían quedar sin servicio, y miles de madres trabajadoras enfrentarían una carga adicional de cuidados. En un gobierno que impulsa un Sistema Nacional de Cuidados, dejar caer esa red sería un contrasentido estratégico.

La fotografía nacional es clara: México enfrenta presión diplomática, reacomodo electoral, tensión laboral y retos institucionales en salud.

El poder se está moviendo. Y cuando el poder se mueve, no basta mirar los discursos: hay que seguir los expedientes, los contratos, las alianzas y los datos duros.

Porque la gobernabilidad no se mide por quién habla más fuerte, sino por quién resuelve antes de que el problema explote.